

PROPOSICIONES MODIFICATORIA

Modifíquese el artículo 2 del Proyecto de Ley 224 de 2019 Cámara “*Por medio del cual se crea el Certificado de Responsabilidad Étnica Empresarial y se dictan otras disposiciones*”, el cual quedará así:

ARTÍCULO 2°. INCENTIVOS. Las empresas, las uniones temporales y/o los consorcios que tengan vigente el Certificado de Responsabilidad Étnica Empresarial tendrán un puntaje adicional en los procesos de selección contractual que adelanten con el Estado.

PARÁGRAFO 1: El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio del Trabajo y el Departamento Nacional de Planeación o de quienes hagan sus veces, expedirá el decreto reglamentario que establezca una puntuación adicional en los procesos de licitación pública, concurso de méritos y contratación directa, para las empresas que en su planta de personal tengan población negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, **población Rom o indígena**, contratadas con todas las exigencias y garantías legalmente establecidas.

PARÁGRAFO 2: Las entidades estatales a través de los supervisores o interventores del contrato según corresponda, deberán verificar durante la ejecución del contrato que los proponentes que resultaron adjudicatarios mantienen en su planta de personal el número de trabajadores pertenecientes a población negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, **población Rom o indígena** en los niveles de dirección, supervisión, y operación que dieron lugar al otorgamiento del Certificado de Responsabilidad Étnica Empresarial. El contratista deberá aportar a la entidad estatal contratante la documentación que así lo demuestre.

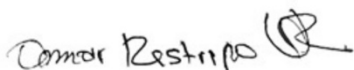
Dicha verificación se hará con el certificado que para el efecto expide el Ministerio del Trabajo y la entidad estatal contratante verificará su vigencia, de conformidad con la normativa aplicable.

La reducción del número de trabajadores acreditados para obtener el puntaje adicional, constituye incumplimiento del contrato por parte del contratista, y dará lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las normas aplicables. El procedimiento para la declaratoria de incumplimiento deberá adelantarse con observancia a los postulados del debido proceso, en aplicación de

los principios que rigen la actividad contractual teniendo presente los casos de fuerza mayor o caso fortuito.

PARÁGRAFO 3: El Gobierno Nacional tendrá un término de seis (6) meses para reglamentar lo consagrado en el presente artículo.

De los Congresistas.



OMAR DE JESÚS RESTREPO
REPRESENTANTE A LA CÁMARA



JAIRO REINALDO CALA SUÁREZ
REPRESENTANTE A LA CÁMARA



LUIS ALBERTO ALBAN URBANO
REPRESENTANTE A LA CÁMARA



CARLOS A. CARREÑO MARÍN
REPRESENTANTE A LA CÁMARA